



NUE ACUM 97y98-A-2020 (RS)

XXXXXXXXXXXXX contra Dirección General de Centros Penales (DGCP)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno.

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por el ciudadano **XXXXXXXXXXXXXXXXX**, en adelante “la parte apelante” o “el apelante”, en contra de las resoluciones emitidas por la Oficial de Información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**, en fecha 20 de julio de 2020, bajo las referencias UAIP/OIR/083/2020 y UAIP/OIR/086/2020.

1. Descripción del caso

El apelante presentó, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **DGCP**, una solicitud en la que requirió, entre otras cosas, información concerniente a:

“1) Balances mensuales de estados financieros (sic) de Tiendas Institucionales en los seis meses comprendidos entre el uno de diciembre de dos mil diecinueve y el uno de mayo de dos mil veinte; y, 2) Copia Certificada del documento por medio del cual se declaran reservadas las informaciones de la Asociación Yo Cambio, a partir del veinte de agosto de dos mil diecinueve”

Al respecto, para el primer requerimiento, la oficial de información resolvió que lo solicitado estaba en proceso de cierre contable por el área de contabilidad, aún pendientes del área de auditoría interna y externa, a fin de presentar datos de las operaciones razonables y fidedignas; por su lado, respecto del segundo requerimiento se resolvió que como Institución, la **DGCP** no estaba obligada a brindar ese tipo de información de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en su Art. 10.

Como consecuencia de lo anterior, el apelante manifestó su inconformidad con lo resuelto en el primer requerimiento, señalando que no es creíble bajo ningún punto de vista la

respuesta proporcionada por el ente, puesto que, en estos tiempos de la informática, ese tipo de información automáticamente está al día; además de que no incluyen el documento en el que se expresan estos atrasos, solo indican una negativa a entregar la información solicitada, procediendo a la interposición de la presente apelación.

Una vez admitido el recurso de apelación, el caso fue asignado a la comisionada **Roxana Soriano Acevedo** para dar trámite e impulso a este procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

Durante la instrucción de este procedimiento, la comisionada instructora al efectuar el análisis de la documentación que se encuentra agregada al expediente en comento, recomendó al Pleno de Comisionadas/os que el procedimiento quedara reducido a una cuestión de derecho, en atención a la aplicación de normas y principios establecidos en la LAIP y Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), así como el DAIP del apelante, de conformidad con el art. 102 de la LAIP, por lo que, se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso.

En ese sentido, este Instituto estima que existen elementos suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo con fundamento en la documentación que obra en el expediente administrativo y la prueba aportada por el ente obligado.

2. Análisis del Caso

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; **(II)** consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) y sobre la naturaleza de la información solicitada; y, **(III)** consideraciones con respecto al secuestro de la información requerida por el ciudadano, por parte de la Fiscalía General de la República.

(I) Habiendo advertido que dentro del expediente que conforma el presente procedimiento se encuentran elementos suficientes para emitir un pronunciamiento, este Instituto consideró que resultaba inoficiosa la celebración de la audiencia oral prevista dentro del procedimiento de apelación.

Este criterio también ha sido establecido por la jurisprudencia Contencioso Administrativo¹, el cual implica que cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho, resulta aplicable lo establecido en el art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), “...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia”. En ese sentido, la Sala expresó que la omisión de la audiencia establecida en el art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, a una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, de conformidad con el art. 102 de la LAIP y art. 309 del CPCM.

(II) El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el art. 6 de la Cn. El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público.

Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Asimismo, el art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información

¹ Sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.

es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

El art. 6 letra “c” de la LAIP establece que es información pública aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.

Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante, los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

En este sentido, cabe mencionar que tal como establece el Manual de Operaciones y Funciones de la **DGCP**, las “Tiendas Institucionales” es una unidad dependiente de la Subdirección Administrativa, la cual tiene por objeto controlar y administrar los recursos generados por las tiendas institucionales en los centros penitenciarios del país, así como brindar programas de asistencia social a las personas privadas de libertad, y satisfacer necesidades inmediatas del establecimiento penitenciario, por lo tanto, se considera que la información resguardada en las Tiendas Institucionales supone información de carácter público sin duda alguna.

(III) Por otro lado, resulta necesario realizar un análisis exhaustivo respecto de la prueba aportada, lo anterior bajo la acepción del principio de verdad material dispuesto en el Art. 3 numeral 8 de la LPA, donde se señala que “[l]as actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos...”, todo ello

a modo de emitir un pronunciamiento acorde a derecho y que, al mismo tiempo, atienda a las cuestiones lógicas y específicas del caso en concreto.

En esa línea, es importante destacar que la carga de la prueba para justificar cualquier negativa al acceso a la información solicitada a un ente obligado al cumplimiento de la LAIP, debe recaer en dicha entidad, pues con ello se alcanza un mayor grado de seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, al estar la misma en control del Estado, lo cual busca evitar el actuar discrecional de los entes obligados al momento de invocar las restricciones que ya establece la Ley.

Al respecto, en el informe de defensa rendido el 9 de septiembre de 2021 por la representación de la **DGCP**, se ofertó como prueba lo siguiente: *“copia de la resolución de las ocho horas y treinta minutos del 8 de septiembre de 2020 por el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador”*, en la cual se resuelve -entre otras cosas- autorizar el registro y allanamiento de las oficinas de Tiendas Institucionales de la **DGCP** desde las once horas del 8 de septiembre hasta las diecisiete horas del 11 de septiembre, ambas fechas del 2020.

En relación a lo anterior, vista y analizada la documentación aportada como prueba dentro del informe rendido por el ente obligado, conforme a las reglas del valor tasado regulado en el art. 106 inciso tercero de la LPA y 416 del CPCM, se tiene por acreditado lo siguiente: i) que ha existido una orden emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador, por medio de la cual se permite la realización del allanamiento y secuestro de información solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) a las Tiendas Institucionales de la **DGCP**; ii) que las oficinas de tiendas institucionales de la **DGCP** fueron allanadas por la FGR durante las once horas del 8 de septiembre hasta las diecisiete horas del 11 de septiembre, ambas fechas del 2020; y iii) que dicho allanamiento vino acompañado del secuestro de bienes, objetos y documentos relacionados al hallazgo e investigación de actividades ilícitas.

Dicho esto y con relación a la mencionada diligencia, este Instituto tiene a bien establecer que, en primer lugar, un allanamiento, tal como lo describe la jurisprudencia²,

² Resolución pronunciada por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, a las quince horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre del año dos mil doce. Referencia No. 140-12-9

significa *entrar por la fuerza a una casa ajena o contra la voluntad de su dueño*. En segundo lugar, en cuanto al secuestro de información, el Art. 283 del Código Procesal Penal (CPP) establece que el fiscal durante el desarrollo de las diligencias de investigación, dispondrá que sean incautados o recolectados y conservados los objetos o documentos relacionados con la comisión de un hecho delictivo y aquellos que puedan servir como medios de prueba.

Asimismo, la jurisprudencia³ define el secuestro de bienes como *un acto de orden procesal que consiste en la recolección y aseguramiento de ciertos objetos para su ingreso a control judicial con la finalidad de garantizar su identidad e integridad*. Asimismo, lo define como *una medida cautelar de carácter patrimonial que consiste en aprehender o sustraer objetos, cosas, instrumentos o efectos relacionados con el hecho delictivo que se investiga*.

De igual manera, hay que mencionar que, en razón de la naturaleza de este proceso judicial, tal como lo establece el Art. 191 del Código Procesal Penal (CPP), *cuando haya un motivo fundado para presumir que en un lugar público o privado existen objetos relacionados con la comisión del hecho punible que se investiga, o que allí puedan efectuarse detenciones, el fiscal (siendo lo que ocurrió en este caso) deberá solicitar al juez la expedición de una orden de registro de ese lugar (...)*.

Habiendo dilucidado lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Art. 76 del CPP, el cual establece que: (...) *las diligencias de investigación serán reservadas y sólo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas para intervenir en el proceso*, este Instituto determina que, por esta vez, no es posible ordenar la entrega de la información solicitada por el ciudadano, debido a que se ha demostrado ante esta sede administrativa, que existen diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República en las tiendas Institucionales de la **DGCP**.

En consecuencia, este Instituto como principal garante del derecho de acceso a la información pública, considera procedente confirmar por esta vez el argumento de la **DGCP**, debido a *la imposibilidad que concurre en la actualidad para que la DGCP pueda entregar dicha información*.

³ Resolución pronunciada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, a las doce horas del uno de febrero del año dos mil diecisiete. Referencia No. 32-2017.

Decisión del Caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 85 de la Cn, 58 letra “d”, 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, 79 y 135 de la LPA, este Instituto, **resuelve**:

a) Confirmar por esta vez las resoluciones pronunciadas por la oficial de información de la Dirección General de Centros Penales -DGCP-, emitidas el 20 de julio del 2020, bajo las referencias UAIP/OIR/083/2020, y UAIP/OIR/086/2020; por los motivos expuestos en la presente providencia.

b) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, si así se considerase necesario.

c) Archivar el presente procedimiento al momento que la presente resolución tenga grado de firmeza.

d) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-

[illegible]